

1º.- Con fecha 14 de noviembre de 2022 tuvo entrada en RENFE-Operadora, E.P.E., al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en adelante, Ley de Transparencia), una solicitud de representada por \_\_\_\_\_, que quedó registrada con el número 001-073743. A partir de dicha fecha comenzó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la citada ley para su resolución. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2022 fue ampliada en un mes adicional según el mismo artículo de la citada Ley.

2º.- En virtud de la referida solicitud, se requiere acceso a información en los siguientes términos:

*Asunto*

*Datos fiabilidad Rodalies Catalunya*

*Información que solicita*

*Datos de fiabilidad completos de la totalidad del servicio de Cercanías Cataluña del último año presentados de forma individualizada para cada línea, de acuerdo con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Título II Capítulo I Artículo 5).*

*Análisis del funcionamiento de Cercanías Cataluña desde la introducción del horario cadenciado en las líneas que pasan por el túnel de Plaça Catalunya, concretamente las líneas R1, R3, R4, RG1 y R12.*

*Datos que indiquen el cambio en la calidad del servicio percibida por las personas usuarias a raíz de esta medida.*

3º.- La solicitud planteada tiene por objeto el acceso a información sobre fiabilidad y a un análisis sobre el funcionamiento de los servicios ferroviarios de Cercanías en Cataluña, denominados *Rodalies*, los cuales son prestados en la actualidad por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. (en adelante, Renfe Viajeros).

La competencia respecto de los referidos servicios ferroviarios la ostenta la Generalitat de Cataluña, a los efectos de lo establecido en el Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.

En su condición de autoridad competente, la Generalitat publica periódicamente información detallada sobre las obligaciones de servicio público de su competencia, incluidos datos agregados sobre la calidad y el estado del servicio, los cuales satisfacen plenamente el interés público y la finalidad de fiscalización que prevé la normativa de transparencia administrativa. Asimismo, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y desde este grupo empresarial se publica información adicional sobre la prestación de los referidos servicios ferroviarios y sobre el desempeño de Renfe Viajeros.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el artículo 22.3 de la Ley de Transparencia, que establece que, si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella, se acuerda estimar parcialmente la solicitud de acceso planteada, poniendo en conocimiento de la asociación peticionaria que la información de carácter público sobre los servicios ferroviarios de *Rodalies*, en concreto, la relativa a los principales indicadores de fiabilidad, calidad y estado del servicio se encuentra publicada en el siguiente enlace:

- <https://rodalies.gencat.cat/ca/inici/>

Asimismo, como ya se ha referido, tanto desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como desde este grupo empresarial se hacen públicos los principales indicadores sobre el servicio de *Rodalies*, entre los que se incluyen los datos obtenidos en las encuestas de satisfacción realizadas a los clientes. La referida información se encuentra disponible en los denominados *Informes del Observatorio del Ferrocarril en España* y en los *Informes de Gestión del Grupo Renfe* que se publican junto con las cuentas anuales, los cuales son accesibles, respectivamente, a través de los siguientes enlaces:

- <https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/observatorios/observatorio-del-ferrocarril-en-espana>
- <https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/gobierno-corporativo-y-transparencia/informacion-economica-y-de-actividad/cuentas-anuales-grupo-renfe>

4º.- Sin perjuicio de la información facilitada en el apartado precedente, que, como se ha referido, satisface plenamente el interés público y la finalidad de fiscalización que prevé la normativa de transparencia administrativa, es preciso señalar que el derecho de acceso a la información pública no alcanza la obtención de respuestas expresas ni la elaboración de informes *ad hoc* para satisfacer una concreta solicitud, que es a lo que conduciría la segunda parte de la solicitud planteada, al requerirse un análisis sobre el funcionamiento del servicio de Rodalies. Como han reconocido los Tribunales, este derecho no ampara la elaboración de informes a petición sin soporte de un expediente administrativo. Asimismo, es preciso traer a colación el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia, que establece que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

En relación con el referido precepto y el concepto de ‘reelaboración’, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) ha señalado en su Criterio Interpretativo CI/007/2015 que: *(...) el concepto de reelaboración como causa de inadmisión (...) puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información.*

Partiendo del referido criterio administrativo, atender una solicitud como la planteada, en la parte que excede de la que ya se encuentra publicada, implicaría para esta entidad y para su filial, Renfe Viajeros, una carga administrativa desproporcionada, toda vez que implicaría la elaboración de un informe *ad hoc* para poder dar una respuesta, recabando datos que no se encuentran disponibles en un único soporte ni que puede ser extraída sin realizar un tratamiento previo por parte de personal que habría que apartar de sus funciones empresariales habituales. En consecuencia, las circunstancias expuestas ponen de manifiesto la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia respecto de la información que excede de la que se encuentra publicada, a la cual se ha concedido acceso.

Asimismo, teniendo en cuenta que mediante la solicitud planteada se exige un informe sobre fiabilidad, esto es, relativo a aspectos concretos sobre la calidad del servicio y eventuales incidencias, cabe reseñar que la normativa de transparencia tampoco alcanza a la obtención de este tipo de información sin antes ponderar el perjuicio económico y comercial que su difusión le podría ocasionar a la empresa o empresas afectadas.

En este sentido, los juzgados y tribunales han venido reconociendo que el derecho de acceso, de configuración legal, no es absoluto ni constituye un derecho fundamental, lo que supone que puede ser limitado de manera justificada cuando entre en conflicto con otros bienes jurídicos protegidos, entre los que se encuentran los intereses económicos y comerciales de las organizaciones, entidades o empresas afectadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 h) de la Ley de Transparencia.

El CTBG ha establecido en este sentido, en su Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, que la aplicación del referido límite precisa la realización de **un ‘test del daño’, mediante el que se valore el perjuicio que produciría la difusión de información como la requerida, y que su resultado se pondere con el del denominado ‘test del interés público’, cuyo objeto es valorar si en el caso concreto concurre un interés público o privado, específico y superior al interés empresarial, que pueda justificar el acceso.**

Atendiendo a la naturaleza de la información solicitada, en relación con el test del daño el propio CTBG ha puesto igualmente de manifiesto en diferentes resoluciones que la Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar a los intereses económicos y comerciales de las empresas que dependen de ella. En concreto, dicho organismo considera que, si se hiciese pública información relacionada con eventuales incidencias del servicio, como sucede con la relativa a la fiabilidad y calidad, la mayoría ocasionadas por causas ajenas a la empresa ferroviaria que lo presta, se podría crear una errónea percepción en el público que afectaría de manera significativa e injustificada a sus intereses económicos y comerciales, por lo que dicha información debe ser considerada y tratada como un secreto comercial.

Partiendo de la doctrina sentada por el CTBG, es igualmente preciso señalar que los servicios ferroviarios sobre los que se solicita información compiten en la actualidad con otros modos de transporte, (principalmente con autobuses, taxis, vehículos VTC y coches particulares), circunstancia que pone de manifiesto que conceder acceso a datos vinculados a eventuales incidencias supondría hacer pública información privilegiada sobre la gestión y la explotación del servicio, la cual no es facilitada por el resto de los operadores de transporte con los que compite la mercantil Renfe Viajeros, ni siquiera voluntariamente, al ser susceptible de alterar las reglas de la sana competencia en el sector del transporte.

Asimismo, en el presente caso no se aprecia la concurrencia de ningún motivo o razón, de naturaleza pública o privada, con entidad suficiente para desplazar la protección de los legítimos intereses económicos y comerciales de Renfe Viajeros (test del interés público), más si cabe teniendo en cuenta la información que se publica tanto desde

este grupo empresarial, como por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat de Cataluña, en su condición de autoridad competente.

Teniendo en cuenta el resultado que ofrecen en este caso el test del daño y el test del interés público, resulta procedente la aplicación parcial del límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 h) de la meritada Ley de Transparencia respecto de la información que excede de la que se encuentra publicada, la cual, como se ha referido, satisface plenamente el interés público y la finalidad de fiscalización que prevé la normativa de transparencia administrativa.

5º.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, en la fecha de la firma electrónica.

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

▪  
(  
,  
▪

**D. Isaías Táboas Suárez**